



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 192/2017
ACTOR: PODER JUDICIAL DE MORELOS
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD

En la Ciudad de México, a tres de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con lo siguiente:

Constancias	Registro
Escrito de César Omar Cruz Barrera, delegado del Poder Judicial del Estado de Morelos.	029365
Oficio LIV/SG/SSLYP/DJ/1o.6477/2019 de Gerardo Estrada Díaz, Delegado del Congreso de Morelos, así como anexos en copias certificadas.	029922

Documentales recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Conste.

Ciudad de México, a tres de diciembre de dos mil diecinueve.

Agréguese al expediente, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito del delegado del Poder Judicial y el presentado por el delegado del Poder legislativo, ambos del Estado de Morelos, personalidad que tiene reconocida en autos, por medio de los cuales desahogan requerimientos relacionados con el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto.

En primer término, el Poder Judicial **desahoga la vista** dada en proveído de cinco de agosto del presente año, a fin de **manifestar** si con la transferencia realizada por la cantidad de \$4'346,774.82 M.N. (Cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), se cuenta con el numerario suficiente para el pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial, en las ejecutorias dictadas en las controversias constitucionales **176/2017, 180/2017, 181/2017, 182/2017, 186/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017, 192/2017 y 193/2017** (incluyendo la controversia constitucional 316/2017, que forma parte del décimo bloque), o manifestara lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, el cual obra en autos.

Al respecto informa, en esencia que el cumplimiento entraña una cuestión formal y otra material, la primera relacionada con la modificación del "artículo 2º.- *La pensión decretada deberá cubrirse al 95% del último salario de la solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del artículo Décimo Octavo del Decreto Número Setenta y Seis por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero, al treinta y uno de Diciembre de dos mil diecinueve y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes...*", y la cuestión material relacionada con la transferencia efectiva de los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.

PI
SL

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 192/2017

De lo anterior, según el Poder actor, se advierte que el Congreso del Estado de Morelos determina que es el Poder Judicial del mismo Estado quién se hará cargo de erogar las pensiones, generando una obligación indeterminada en favor del Poder Judicial del Estado, puesto que los decretos jubilatorios no tienen una vigencia específica, ya que su vigencia se encuentra necesariamente vinculada al tiempo de vida del jubilado, por lo que en cumplimiento de la sentencia dictada en la presente controversia constitucional, el Congreso del Estado deberá garantizar en cada ejercicio fiscal siguiente los recursos necesarios y suficientes para cubrir todas las obligaciones inherentes al decreto.

Asimismo, afirma que “los recursos transferidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos que ascienden a la cantidad de **\$4'346,774.82 M.N. (Cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional) resultan suficientes para cumplir con todas las obligaciones que impone el decreto jubilatorio de Dulce María Gavilán Aragón**, esto es, con la ejecutoria emitida en la presente controversia constitucional [192/2017] así como con las ejecutorias constitucionales emitidas en las controversias constitucionales **176/2017, 180/2017, 181/2017, 182/2017, 186/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017 y 193/2017, incluyendo la controversia constitucional 316/2017.**”

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, refiere que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos en sus artículos 38 y 40 señala que toda erogación del Estado deberá contar con saldo suficiente en la partida del Presupuesto de Egresos respectivo, luego entonces para estar en condiciones de realizar una ampliación presupuestal, debe identificarse primero la fuente de ingresos de la ampliación.

De lo anterior, informa que el Congreso del Estado de Morelos, mediante oficio número PDM/1AÑO/137/2019, de fecha 16 de abril de 2019, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado, que informara al Poder Legislativo la manera en la que se daría cumplimiento a lo requerido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la ampliación presupuestal al Poder Judicial por la cantidad de \$25,450,034.49 (veinticinco millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y cuatro pesos 49/100 MN).

En adición, señala que “*En contestación a lo requerido, mediante similar número CJ0224/2019, de fecha 29 de abril de 2019, que en copia certificada se anexa al presente, el M. EN P. Y A. J. Samuel Sotelo Salgado, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, hace del conocimiento de éste Poder que:*

1. *En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, se advierte que el Poder Judicial del Estado de Morelos reporta en su listado de pensionados y jubilados, que ha cubierto el pago de diversos pensionados que guardan relación con el Acuerdo que nos ocupa y que dicho pago se cubrió con el erario del Gobierno del Estado de Morelos, en sus ejercicios fiscales del 2016, 2017 y 2018, por lo que la cantidad solicitada se destinaría a pagos ya realizados.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

2. Que el Poder Judicial con base en su autonomía tiene la obligación (sic) cumplir con el momento de austeridad que se está pasando, a fin de evitar que colapse el Estado.

3. Que los \$80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 MN), autorizados al Poder Judicial en el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, para el pago de decretos pensionarios controvertidos ante esa Suprema Corte, resultan bastos y suficientes para cubrir los pagos respectivos.

4. No obstante sin conceder que existiera la obligación de realizar el pago de la cantidad que solicita, la Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos mediante oficio PF/1438/2019 de 24 de abril de 2019, refiere que de conformidad con lo informado por la Coordinación de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, ante el escenario que impera en la entidad, no resulta posible determinar en este momento, una ampliación presupuestal por el monto solicitado, empero de acuerdo con el comportamiento de la recaudación estatal, la cual se va actualizando con el avance del ejercicio fiscal y con base en los supuestos jurídicos y administrativos dispuestos para tal efecto en el marco normativo aplicable, se realizará la autorización de una ampliación presupuestal por el monto que resulte necesario para arribar a la cantidad de \$105,450,034.49 (ciento cinco millones cuatrocientos cincuenta mil treinta y cuatro pesos 49/100 MN), de manera oportuna conforme a las fechas límites que corresponden a cada uno de los bloques ordenando en el acuerdo de mérito.

Ahora bien, atendiendo al compromiso del Ejecutivo Estatal de cumplir a cabalidad con el pago de las controversias de manera oportuna dentro de los bloques señalados por ese Máximo Tribunal, y de ser necesario realizar la ampliación presupuestal correspondiente, en términos de la legislación vigente, corresponde al Ejecutivo en primer lugar solicitar dicha ampliación y someterla a consideración del Poder Legislativo, y será hasta en tanto se dé el supuesto indicado en que el Poder Legislativo se encuentre en condiciones de pronunciarse en cuanto a dicha ampliación presupuestal... "En consecuencia, **dese vista al Poder Judicial de Morelos, por conducto de quien legalmente lo represente, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad, si con la transferencia realizada por la cantidad de \$4'346,774.82 M.N. (Cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil setecientos setenta y cuatro pesos 82/100 Moneda Nacional), se cuenta con el numerario suficiente para el pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial, en las ejecutorias dictadas en las controversias constitucionales 176/2017, 180/2017, 181/2017, 182/2017, 186/2017, 187/2017, 190/2017, 191/2017, 192/2017 y 193/2017, o manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos sobre el cumplimiento de las ejecutorias de mérito.**

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 192/2017

Lo anterior, de conformidad con los artículos 59, fracción I¹, y 297, fracción II² del Código Federal de Procedimientos Civiles y con apoyo en la tesis de rubro: "**CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESAHOGO DE UNA PREVENCIÓN QUE IMPLIQUE EL EJERCICIO DEL DERECHO SUSTANTIVO DEL ACTOR DEBE REALIZARLO LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO ACTOR, POR CONDUCTO DE LOS FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS PARA REPRESENTARLO**"³.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 11, párrafo primero⁴, 46, párrafo primero⁵, y 50⁶ de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 297, fracción II⁷, y 305⁸ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1⁹ de la referida ley.

¹ **Artículo 59.** Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
(...)

² **Artículo 297.** Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

II. Tres días para cualquier otro caso.

³ **Tesis 1a. LXIX/2012 (10a).** Primera Sala. Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto: "El artículo 28 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al Ministro instructor la facultad para que, en caso de que considere que los escritos de demanda, contestación, reconvención o ampliación fueren oscuros o irregulares, prevenga a los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro de un plazo de cinco días. Esta facultad debe entenderse en el sentido de que sean los promoventes quienes desahoguen la prevención y subsanen las irregularidades requeridas, esto es, las entidades, poderes u órganos legitimados por el artículo 105, fracción I constitucional, de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la indicada ley reglamentaria, por los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En ese sentido, tratándose del desahogo de una prevención que implique el ejercicio del derecho sustantivo de la acción, necesariamente se requiere que su desahogo se lleve a cabo por la propia entidad, poder u órgano actor, a través de los funcionarios legalmente facultados para representarlo y no por conducto de los delegados acreditados, ya que éstos, conforme al citado artículo 11, párrafo segundo, únicamente podrán: a) presentar promociones; b) concurrir a las audiencias y en ellas rendir pruebas; c) formular alegatos; y, d) promover los incidentes y recursos previstos por la citada ley; actuaciones que sólo pueden tener lugar una vez admitida la demanda y que no implican el ejercicio del derecho sustantivo del órgano actor, por lo que en ningún caso podrán referirse a la contestación, reconvención, ampliación o aclaración de la demanda, cuando implique el ejercicio del derecho sustantivo de la entidad, poder u órgano legitimado por el citado artículo 105, fracción I de la Constitución Federal."

⁴ **Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. [...]

⁵ **Artículo 46.** Las partes condenadas informarán en el plazo otorgado por la sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente cumplida. [...]

⁶ **Artículo 50.** No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

⁷ **Artículo 297.** Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

II. Tres días para cualquier otro caso.

⁸ **Artículo 305.** Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Estos siempre serán notificados en su residencia oficial.

⁹ **Artículo 1.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.



Finalmente, con fundamento en el artículo 287¹⁰ del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, hágase la certificación del plazo otorgado en este proveído.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Notifíquese.

Lo proveyó y firma el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con la Maestra Carmina Cortés Rodríguez, Secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

A
C
U
E
R
D
O

PS
SL

Esta hoja forma parte del acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la **controversia constitucional 192/2017**, promovida por el Poder Judicial de Morelos. Conste.
CCR/NAC 5

¹⁰ **Artículo 287.** En los autos se asentará razón del día en que comienza a correr un término y del en que deba concluir. La constancia deberá asentarse precisamente el día en que surta sus efectos la notificación de la resolución en que se conceda o mande abrir el término. Lo mismo se hará en el caso del artículo anterior.
La falta de la razón no surte más efectos que los de la responsabilidad del omiso.